

El sobre misterioso

El Gran Jurado que ha estado estudiando los documentos de instrucción del caso Watergate entregó el 1 de marzo dos sobres al juez Sirica. En uno de ellos se contenía la resolución de que hay pruebas suficientes como para procesar a siete personas a las que se puede acusar de diversos delitos. Uno es el que fue ministro de Justicia, Mitchell, sobre el que pesan ahora los siguientes cargos: conspiración, obstrucción a la justicia, perjurio en sus declaraciones ante el Senado, mentira ante el FBI, mentira ante el propio Gran Jurado. Acusaciones parecidas recaen sobre otras seis personas relacionadas íntimamente con el presidente Nixon. La intriga está en el otro sobre, cuyo contenido no se ha hecho público: el sobre misterioso. El «Washington Post» cree saber que el documento contenido en él compromete seriamente con estas, o parte de estas acusaciones, al presidente Nixon. Parece que el Gran Jurado ni el juez especial Sirica pueden procesar directamente a Nixon, sino comunicar el resultado de su instrucción al

Comité Judicial de la Cámara. Es decir, para que se sumen al proceso del «impeachment» que habría de determinar el Congreso y que, si fuese adoptado, privaría a Nixon de su condición de presidente y le entregaría a la justicia para que ésta decidiese si le correspondía una penalidad civil, además de las políticas.

Vorazmente, el complejo Watergate se ha ido tragando todo el grupo Nixon; ya son 30 las personas de su círculo íntimo destituidas y enjuiciadas, sin contar con el vicepresidente Agnew, procesado y destituido por delitos comunes ajenos al caso Watergate. Que además del vicepresidente un ministro de justicia, varios ayudantes personales, los abogados de la Casa Blanca y el propio abogado de Nixon estén en esta situación parece algo realmente monstruoso. Más aún, que el centro de ese grupo, el propio Nixon, pueda seguir resistiendo. Aun siendo inocente, el entredicho es tan grave y la política debería ser tan escrupulosa, que la propia situación de sus colaboradores sería más que suficiente para que dimitiese. Sin embargo, en la con-

ferencia de prensa de la semana pasada, Nixon apareció frío y sonriente, sereno y firme, para asegurar una vez más que ni dimitiría ni sería víctima del «impeachment» ni de ninguna clase de procesamiento.

La popularidad del partido republicano ha descendido de tal modo, que en la última encuesta de opinión pública está en relación de uno a dos con el partido demócrata. Serían precisamente los republicanos los que más interés podrían tener en que esta situación no se prolongase hasta las elecciones próximas —1976—; que Nixon cayese y que el vicepresidente, Gerald Ford, pudiese restablecer la imagen del partido en el poder.

La alternativa de que Nixon pueda restablecer la confianza del pueblo en él parece ya absoluta-

mente imposible. Podrá salir triunfante de las acusaciones, podrá, quizá, evitar el procedimiento del «impeachment»; pero en ningún caso podrá disolver la negra nube de sospechas que envuelve su cabeza. En el Congreso, los demócratas no parecen tener demasiada prisa en promover el «impeachment» o en urgirlo: les interesa, sobre todo, mantener continuamente activas las sospechas y las acusaciones para contribuir así lentamente al desmoronamiento del partido rival. Por otra parte, el tema es demasiado grave —por lo que supone de daño al principio de la presidencia— como para proceder sin tener pruebas absolutamente concluyentes. ¿Las contiene el sobre misterioso? Es la incógnita que tal vez se despeje esta misma semana.

ITALIA

Crisis política en plena crisis económica

En una atmósfera truculenta de escándalos —¿habían sobornado las compañías petroleras a ministros, personalidades, periodistas, para producir un alza injustificada de los precios?—, de sospechas de complots fascistas, de huelgas generales "de advertencia", de embrollos y manipulaciones en torno a la ley del divorcio y sus derivaciones, ha caído el gobierno italiano. No es una novedad: en Italia los gobiernos se suceden unos a otros a una velocidad sorprendente, y son prácticamente iguales entre sí. Los grandes problemas se congelan, bien porque no se ve solución práctica para algunos de ellos, bien porque los compromisos de las familias que forman la coalición gobernante bloquean cada uno las soluciones que proponen los otros.

La rotura del gobierno se ha producido esta vez por el partido republicano, que es el más a la derecha de la coalición. Ha dimitido su representante en el gobierno, La Malfa, ministro del Tesoro. Hombre de dimisiones fáciles y de reparaciones también fáciles. Su tema, en esta ocasión, era el de que los otros partidos políticos no le permitían realizar su política financiera. La Malfa había negociado con el Fondo Monetario Internacional un empréstito de 1.200 millones de dólares para defender la lira, pero el Fondo había impuesto ciertas condi-

ciones. Consistían éstas en una serie de medidas de austeridad y de recesión, que implicarían por lo menos un congelamiento de salarios. Los otros partidos políticos que forman el gobierno, principalmente, los socialistas, temían que en plena agitación social estas medidas provocasen una ola de huelgas y de protestas, justificadas por la declaración de los sindicatos de que esta especie de defensa de la moneda era en realidad una defensa de los intereses del gran capital, de la industria más poderosa y aun de la media; pero que se haría a costa de la clase trabajadora y de la pequeña burguesía. Por otra parte, se argüía que poco a poco la política interior italiana va siendo dictada por los organismos internacionales de crédito, como el Fondo Monetario, que ofrecen dinero a cambio de modificaciones en la estructura social. Es innecesario decir que el partido republicano, a su vez, acusa a los otros partidos de la coalición centro izquierda de realizar una política que perjudica los intereses de las clases más débiles de la sociedad, del pequeño ahorro, de los obreros y de la burguesía media... Naturalmente, al producirse la crisis queda suspendido el empréstito del Fondo, así como otro que La Malfa había negociado con un grupo de diecinueve bancos privados de los Estados Unidos; se supone que és-

John Mitchell, ex ministro de Justicia, está acusado ahora de conspiración, obstrucción a la justicia, perjurio...

